

EXPEDIENTE: IEEM/SE/AE/34/2014

Toluca de Lerdo, México; a once de febrero dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/34/2014**, formado con motivo del posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria para la integración de las Juntas Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral en curso; por parte del **C. Héctor Galicia Cadena**, Vocal de Capacitación de la Junta Municipal número 26, con sede en Chalco, México; y

R E S U L T A N D O

1. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el Acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, relativo al Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el 2014-2015, el cual contiene los lineamientos para la designación de los Vocales de dichos órganos, así como la convocatoria respectiva.

2. La convocatoria señalada en el resultando anterior, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta del Gobierno" en fecha once de agosto del año dos mil catorce, en los estrados del Instituto y en la página electrónica oficial, divulgación que se mantuvo a partir de la fecha citada, hasta el treinta y uno de octubre de la misma anualidad.

3. Entre el dieciocho de agosto y el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se desarrolló, en sus distintas fases, el procedimiento para la integración de las propuestas de los Vocales Distritales y Municipales.

4. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto el oficio sin número fechado el día próximo anterior, suscrito por el Lic. Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente de este Consejo General, y los CC. Dra. María Guadalupe González Jordan, Mtra. Palmira Tapia Palacios, y, Dr. Gabriel Corona Armenta, Consejeras Electorales y Consejero Electoral, respectivamente, de este Consejo General, a través del cual dichos funcionarios solicitaron al Secretario Ejecutivo girara oficio de colaboración al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que informara cuáles de los aspirantes a Vocales Distritales y Municipales que serían designados, pudieran tener relación laboral con los ayuntamientos de los municipios en los que se encontraban participando.

5. En cumplimiento a dicha solicitud, mediante oficio número **IEEM/SE/0810/2014**, de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo solicitó

al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, la información indicada en el resultando que antecede.

6. El día cinco de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número OSFEM/UAJ/SCA/DAL/2084/2014, fechado el treinta de octubre de la misma anualidad, a través del cual el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, hizo llegar la información que se obtuvo de la búsqueda en los archivos de la nómina remitida por las entidades fiscalizables, con relación a los aspirantes designados como Vocales que podían tener relación laboral con los ayuntamientos, con corte al mes de septiembre del año dos mil catorce. No obstante, el referido funcionario también señaló que la entidad a su cargo no podía pronunciarse sobre la veracidad de dicha información, toda vez que la misma se obtenía de documentos digitalizados y no había sido confrontada con los originales respectivos, los cuales obran en poder de las entidades fiscalizadas.

7. En sesión extraordinaria de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante acuerdo número IEEM/CG/68/2014 designó a los Vocales de las Juntas Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, entre quienes resultó el C. Héctor Galicia Cadena como Vocal de Capacitación de la Junta Municipal número 26, con sede en Chalco, México.

8. El siete de noviembre de dos mil catorce, el Presidente y los Consejeros Electorales señalados en el resultando 4, solicitaron al Secretario Ejecutivo girara oficio de colaboración a los ayuntamientos correspondientes para que informaran sobre la posible existencia de relación laboral entre estos últimos y los aspirantes cuyos nombres se acompañaban a la solicitud de mérito y remitieran copias certificadas de la documentación respectiva.

9. A través de los oficios números IEEM/SE/1683/2014 e IEEM/SE/2070/2014, de fechas trece y veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se requirió al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chalco, México, el Ing. Francisco Osorno Soberón, informara a la Secretaría Ejecutiva, si el C. Héctor Galicia Cadena, Vocal de Capacitación de la Junta Municipal número 26, con sede en Chalco, México, laboró o actualmente trabaja en ese Ayuntamiento.

10. Mediante oficio número DAM/RH/3232/2014, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, recibido el veintisiete del mismo mes y año en Oficialía de Partes de este Instituto, la Lic. Verónica Jannette Yáñez Espinosa, Subdirectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Chalco, hizo del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva, que el C. Héctor Galicia Cadena laboró como administrativo más de un año, pero ya no se encuentra trabajando en ese Ayuntamiento.

11. Por oficio número IEEM/SE/3417/2014, de fecha tres de diciembre del dos mil catorce, se le requirió al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chalco, México, el Ing. Francisco Osorno Soberón, informara el periodo de tiempo que laboró el C. Héctor Galicia Cadena, y el cargo o puesto funcional que ostentaba, así como el día que concluyó su relación laboral, acompañando copia certificada de los documentos que corroboren su dicho.

12. Mediante oficio número DAM/RH/3373/2014, de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, recibido el día siguiente en Oficialía de Partes de este Instituto, la Lic. Verónica Jannette Yáñez Espinosa, Subdirectora de Recursos Humanos, hizo del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva que el **C. Héctor Galicia Cadena**, ingresó a laborar el dieciséis de enero de dos mil trece y terminó su relación laboral el quince de noviembre de dos mil catorce, con categoría auxiliar "A" en la Dirección de Obras Públicas Municipales y posteriormente en la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.

13. Por acuerdo de la Secretaría Ejecutiva emitido el quince de diciembre de dos mil catorce, se ordenó que con las constancias atinentes, se integrará el expediente del asunto especial número **IEEM/SE/AE/34/2014**, así como que se diera vista al ciudadano cuya designación se cuestiona, para que en un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, desahogara por escrito su garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho conviniera y ofreciendo las pruebas documentales que para esos efectos estimara convenientes.

14. En fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el C. Héctor Galicia Cadena, presentó un escrito por medio del cual hizo efectivo el desahogo de su garantía de audiencia, teniendo por satisfecho su derecho.

15. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, se tuvo por satisfecho el desahogo de la garantía de audiencia del C. Héctor Galicia Cadena, y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

16. La Presidencia de la Comisión Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, presentó ante sus integrantes el presente proyecto de resolución, ordenando la propia Comisión su remisión al Consejo General, para su aprobación definitiva, en su caso.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-

2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número **IEEM/CG/68/2014**, este Consejo General se encuentra facultado para designar a los vocales de dichos órganos desconcentrados y, en su caso, para sustituirlos; por tanto, es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata del procedimiento instaurado con motivo de la posible sustitución de un ciudadano designado como vocal municipal del Instituto, por el presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de mérito.

SEGUNDO. Estudio de fondo. Previo al estudio de la litis, es conveniente destacar las siguientes consideraciones vinculadas al sentido que habrá de darse a la presente resolución:

a) Marco normativo.

La reforma en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, introdujo múltiples adecuaciones al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo para el presente caso, tener en consideración las acaecidas al artículo 1º, constitucional.

De acuerdo con el párrafo primero de dicho precepto, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella misma establece.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo bajo análisis establece que las normas concernientes a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a favor de que a las personas se conceda la mayor protección. En consonancia con ello, el párrafo tercero ordena a **todas las autoridades**, acorde a sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los informan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

Así, es posible sostener que los párrafos segundo y tercero, del artículo 1º, constitucional, se instituyen como una norma guía para **todas las autoridades** del país, a efecto de que éstas velen en todo momento por los derechos humanos, adoptando las acciones más adecuadas para ello, conforme a sus respectivas atribuciones.

En la especie, los artículos 35, fracción VI, de la Carta Magna, 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho fundamental a ser nombrado para cualquier empleo o comisión público, en condiciones de igualdad, **teniendo las calidades que establezca la ley**. Tal derecho incluye el particular de acceso a los órganos electorales, cuya tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte de éstos, ya sean de máxima dirección —es decir de carácter central— o desconcentrados, tanto de las autoridades administrativas como de las jurisdiccionales de la materia, según ha razonado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 11/2010, publicada en las páginas 27 y 28 de la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, año 3, número 6, correspondiente a 2010, cuyos rubro y texto se citan a continuación:

INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES. ALCANCES DEL CONCEPTO PARA SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.—De la interpretación

sistemática y funcional de los artículos 17; 35, fracción II; 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafos segundo, cuarto y octavo, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, incisos d) y e); 195, fracciones III y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 2, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a fin de dar efectividad al sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, se advierte que el derecho ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, incluye aquellos relacionados con la función electoral, es decir, su tutela exige que los ciudadanos puedan acceder a formar parte como integrantes de los órganos, de máxima dirección o desconcentrados, de las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales estatales.

Cuarta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-4/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.—10 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Luis Alberto Balderas Fernández.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1/2010.—Actor: Jorge Luis Benito Guerrero.—Autoridad responsable: Dirección de Organización Electoral de la Dirección General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Carlos Vargas Baca.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Uninstitucional del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.—17 de febrero de 2010.—Mayoría de seis votos, con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil diez, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Del mismo modo, la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país, ha sostenido reiteradamente que los derechos contenidos en el artículo 35, de la Carta Magna, son de base constitucional y de configuración legal, y que no son absolutos ni ilimitados, sino que pueden estar sujetos a ciertas y determinadas restricciones previstas en la ley, pero siempre que éstas no sean irrazonables, desproporcionadas, caprichosas ni arbitrarias, y que no afecten su contenido esencial. Dicho criterio deriva de las resoluciones recaídas a los expedientes SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, acumulados; SUP-JDC-494/2012, SUP-JDC-3234/2012, SM-II-JDC-011/2000, SM-II-JDC-096/2000 y SM-II-JDC-097/2000, por mencionar sólo algunas.

En consecuencia, de la interpretación de los artículos 35, fracción VI, de la Constitución General de la República; 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con relación a los párrafos segundo y tercero, de la misma Ley Suprema, se desprende que las autoridades en la materia tienen el deber jurídico de respetar y hacer vigentes los derechos humanos de carácter político-electoral, entre los que se encuentra el de acceso a los cargos públicos electorales, mediante las acciones que fuesen necesarias para dar vigencia o efectividad a tales derechos, pero también, absteniéndose de realizar cualquier acto que los vulnere o haga los nugatorios de cualquier manera.

Ahora bien, en términos de los artículos 41, Base V, Apartados A y C, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 168, 169, párrafo primero, 173, 174, 178, 185, fracciones I y VI, 205, 206, 207, 208, fracción I, 209, 214, 215, 216, 217, fracción I, y 218, del código comicial local, el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad. En el ejercicio de dicha función, serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo. Además, el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por **las disposiciones constitucionales relativas**, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y **las del código de la materia**.

Este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, de promover la cultura política democrática, y velar por que

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo, guíen todas las actividades de la institución.

Dicho órgano, tiene entre sus atribuciones la de expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento del Instituto; y la de designar a los Vocales de las Juntas Distritales y Municipales, de entre las propuestas que al efecto presente la Junta General y conforme a los lineamientos que emita el propio órgano superior de dirección.

Señalado lo anterior, es conveniente precisar que, las Juntas Distritales y Municipales son los órganos desconcentrados de carácter temporal del Instituto, a través de los cuales ejerce éste sus funciones en cada uno de los distritos electorales locales y cada uno de los municipios de la entidad; por tanto, intervienen en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos comiciales en cada una de sus respectivas demarcaciones, mediante las atribuciones que la ley y la normatividad reglamentaria les conceden. Dichos órganos se integran por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación, quienes también forman parte del Consejo Distrital o Municipal respectivo; el primero de esos funcionarios en calidad de presidente y los dos restantes con el carácter de secretario, ya sea de manera habitual en el caso del Vocal de Organización, o como suplente, en tratándose del Vocal de Capacitación.

No existe disposición alguna en el Código Electoral, que prevea expresamente los requisitos para ser Vocal de las Juntas Distritales y Municipales. Sin embargo, dicho ordenamiento sí señala los requisitos que deben cumplir los miembros de los Consejos respectivos, que serán los mismos que deben satisfacer los Consejeros del Consejo General del Instituto, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al distrito o al municipio de que se trate, y el de título profesional que no será necesario.

En ese contexto, este Consejo General de conformidad con el artículo 185, fracción I del Código Electoral del Estado de México, puede expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento, debiendo respetar el principio de legalidad y de supremacía constitucional, para que las normas que emita sean en estricto cumplimiento de la ley, estando subordinados a ésta, entre ellas las relacionadas con las que deban ser aplicables para la designación de Vocales Distritales y Municipales.

Con base en dicha facultad, este Consejo General, en su sesión extraordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil catorce, aprobó el acuerdo número **IEEM/CG/16/2014**, denominado "Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015", el cual contiene

los lineamientos en mención, el procedimiento para designar las vocalías de los referidos órganos desconcentrados, y la convocatoria dirigida a los ciudadanos que aspiraran a ocupar esos cargos.

Dicha convocatoria señala, entre otros, los requisitos que debían cumplir los ciudadanos interesados en participar, quedando incluidos en sus Bases Primera y Tercera fracción XIII, las cuales establecen:

Primera. De los participantes.

Podrán participar todos los ciudadanos del Estado de México, en pleno goce de sus derecho políticos y civiles, inscritos en el Padrón Electoral del Estado de México, con residencia en el municipio y distrito electoral local donde pretenden prestar sus servicios, **que no cuenten con empleo remunerado alguno al día de su designación y que estén interesados en ocupar un puesto eventual de tiempo completo**, con funciones directivas en alguna de las juntas distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México; para atender todo lo relativo al Proceso Electoral 2014-2015, considerado lo establecido en el artículo 413 del Código Electoral del Estado de México.

“Tercera. De los requisitos.

De conformidad con lo dispuesto, los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:

...

XIII. No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria.

...”

De los requisitos en cita se derivan dos condicionantes para tenerlos por cumplidos, no contar con un empleo remunerado alguno al día de la designación y no tener una relación laboral con los municipios al momento de la publicación de la convocatoria respectiva.

Sobre dichas exigencias el Tribunal Electoral del Estado de México, se pronunció mediante las resoluciones recaídas a los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificados con las claves JDCL/5/2014, JDCL/43/2014 y JDCL/44/2014 y al Recurso de Apelación RA/9/2014, cuyos criterios sirven de apoyo y resultan orientadores para la resolución del presente asunto.

En esencia el órgano jurisdiccional electoral sostuvo que al ser emitidos el Programa General y la convocatoria atinente, en ejercicio de la facultad reglamentaria que le concede el artículo 185, fracción I, del código de la materia, este Consejo General del Instituto estaba compelido a respetar los principios de reserva de ley y supremacía constitucional.

En este orden, señaló que el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 2º, de la Constitución General de la República establece un principio de reserva de ley, según el cual, los requisitos que deben cumplir los ciudadanos que aspiren a ser Consejeros de los órganos administrativos electorales locales, deben estar previstos en un ordenamiento que tenga el rango de ley; asimismo, que el artículo 11 de la Constitución particular del Estado de México también establece ese principio de reserva, en cuanto que la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México, serán determinadas por la ley respectiva. Así, a efecto de salvaguardar el citado principio de reserva, el artículo 178, del Código comicial local establece, los requisitos que deben reunir los Consejeros de este Consejo General del Instituto, mientras que el diverso numeral 218, señala que los Consejeros de los Consejos Municipales, deberán satisfacer esos mismos requisitos, salvo el de residencia efectiva, que se entenderá referido al municipio de que se trate, y el de título profesional, que no será necesario.

De este modo, la máxima instancia jurisdiccional electoral de la entidad, con apoyo en el criterio que ella misma sostuvo en el diverso juicio ciudadano **JDCL/1/2014**, consideró que los Vocales Ejecutivo, de Organización Electoral y de Capacitación de las Juntas Municipales, también forman parte de los Consejos respectivos, con los cargos que se mencionan en párrafos anteriores, por lo que los aspirantes a ocupar las vocalías deben cumplir los requisitos contenidos en el citado artículo 178, conforme lo señala el diverso 218.

Luego, al no estar previsto en dichos preceptos los requisitos consignados en las Bases Primera y Tercera, fracción XIII de la multialudada convocatoria, el Tribunal Electoral local concluyó que dichos requisitos son ilegales, pues no tienen sustento jurídico alguno para su exigencia, por lo que este Consejo General del Instituto se extralimitó en el ejercicio de su facultad reglamentaria al incluirlos en dicha convocatoria. Estimando que la ilegalidad de los requisitos en estudio deriva también de que contienen por una parte una limitante al empleo remunerado y por otra, una restricción absoluta con respecto a la relación laboral entre el aspirante a vocal y la administración pública municipal, esto es, con independencia de la clase y grado de esa relación.

A mayor abundamiento, respecto a la condición contenida en la Base Primera, *"...no contar con empleo remunerado alguno al día de su designación"*, en la sentencia emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave **JDCL/43/2014**, específicamente se razonó como ya se dijo que era ilegal, y que para el estudio de dicho requisito deben destacarse la existencia de dos momentos en la integración de los órganos desconcentrados; el primero de ellos, se presenta con la designación de los ciudadanos que participaron como Vocales en las Juntas Municipales y el segundo se presenta durante el tiempo que válidamente tiene vigencia el desempeño de las funciones inherentes al nombramiento que ostentarán como servidores públicos electorales.

Lo anterior se sustenta en que durante el tiempo de su nombramiento como Consejeros Electorales no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo las relacionadas a las actividades docentes, científicas y culturales, siempre y cuando no sean remuneradas. Lo cual en criterio del órgano jurisdiccional local, el ejercicio del encargo conferido, debe ser entendido como un momento diverso al de su designación, lo anterior es así, ya que de considerar lo contrario, **sería como restringir al interesado en participar en el proceso electivo que nos ocupa, su derecho fundamental al trabajo remunerado** aun antes de saber si ocupará el diverso para el que concursa, por lo cual consideraron que lo previsto en el artículo antes señalado deba entenderse como un requisito negativo *a priori* al desempeño del cargo razón por la cual dicho precepto no es aplicable para los efectos pretendidos por el actor.

Por otra parte, en cuanto a la fracción XIII, de la Base Tercera *"No tener relación laboral con la administración municipal correspondiente a su ámbito territorial por el cual compite, al momento de la publicación de la presente convocatoria"*, en las sentencias emitidas en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales JDCL/5/2014 y JDCL/44/2014 y el Recurso de Apelación número RA/9/2014, se declaró ilegal porque contiene una restricción absoluta respecto de la relación laboral entre el aspirante a Vocal y administración pública municipal; esto con independencia de clase y grado de relación laboral existente entre el aspirante y la administración pública municipal, y por este simple hecho el ciudadano no podría participar en el proceso de selección de Vocales Distritales y Municipales.

Así las cosas, con base en los criterios sustentados por el Tribunal Electoral local es dable concluir, que los requisitos establecidos en la Base Primera y la fracción XIII de la Base Tercera, de la Convocatoria para la designación de Vocales de las Juntas Distritales y Municipales, son ilegales y, por tanto, no son exigibles a los ciudadanos que eventualmente lleguen a ocupar esos cargos, ya que no derivan de un ordenamiento con rango de ley, y en esta virtud, contravienen el principio de reserva legal implícito en la facultad reglamentaria que el artículo 185, fracción I, del código de la materia concede a este Consejo General del Instituto, además de que el último de los requisitos en mención establece una restricción absoluta en perjuicio de los interesados, al no especificar la clase o el grado de la relación laboral que deben tener para incurrir en el incumplimiento de dicho requisito.

Lo anterior se robustece, si se considera que la obligación de respetar el principio de reserva legal en el tema que nos ocupa, deriva de los artículos 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como del artículo 29, fracción II, de la Constitución particular del Estado de México; como queda evidenciado en párrafos anteriores.

Finalmente, dicha interpretación es también, la que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 1º, constitucional, ya que la estricta legalidad de los requisitos exigidos a los Vocales, es la mejor garantía del respeto al derecho fundamental de acceso a los cargos públicos electorales, previsto en los preceptos apuntados, al reducir las limitaciones a ese derecho, a las previstas taxativamente en la norma legal.

b) Constancias que obran en el expediente.

Así las cosas, ante la evidencia del posible incumplimiento de los requisitos señalados en la convocatoria para la designación de Vocales, la Secretaría Ejecutiva, ordenó integrar el expediente del asunto especial que se resuelve, a efecto de determinar si el ciudadano en cuestión efectivamente incurrió en dicho incumplimiento y, en su caso, dejar insubsistente su nombramiento y proceder a su sustitución.

En esta virtud, se concedió al ciudadano objetado su garantía de audiencia, en cuyo desahogo señaló sustancialmente lo que enseguida se transcribe:

“ En atenta respuesta a su oficio número **IEEM/SE/AE/34/2014**, de fecha quince de diciembre del año en curso, y recibido por el suscrito de forma personal en fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce, al respecto y antes de ofrecer mis pruebas me permito invocar la Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis:1a./J. 11/2014 (10a.), Página:396, que a la letra reza:

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante

la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Por consiguiente y en armonía con la Jurisprudencia invocada, le solicito con el debido respeto, y ya que fui designado mediante Sesión de Consejo, de igual forma solicito se me señale día y hora para poder alegar ante el Consejo lo que mi interés convenga y desahogar ampliamente mi garantía de audiencia. Así lo dispone en la Época: Décima Época, Registro: 2001624, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXXII/2012 (10a.), Página: 501:

DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA Y GARANTÍA DE AUDIENCIA. LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR UN ESCRITO CON ALEGATOS NO IMPLICA EL RESPETO A ESTOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El acatamiento del derecho a una defensa adecuada y la garantía de audiencia en los procesos, requiere que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la posibilidad de alegar. Esta formalidad exige que las partes tengan la posibilidad de presentar pruebas y desvirtuar las de la contraria; de argumentar lo que a su derecho convenga con pleno conocimiento del expediente y la información que consta en el mismo, lo cual generalmente se satisface con la celebración de la audiencia de alegatos, cuya realización es necesaria e independiente de la presencia física de las partes, quienes cuentan con la posibilidad de no concurrir o renunciar al uso de la palabra y presentar sus alegatos por escrito. Por lo mismo, la sola posibilidad de presentar un escrito con alegatos como sustituto de la celebración de una audiencia no implica el respeto a la garantía de audiencia y al derecho a una defensa adecuada, ya que no garantiza que se cumpla con los requisitos materiales mínimos para que la posibilidad de alegar sea efectiva.

En relación a mi derecho de ofrecer pruebas, ofrezco de mi parte para acreditar que cumplo con los requisitos previstos en la Convocatoria para Vocales Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015, las siguientes:

P R U E B A S

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio sin número, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual solicito copia certificada de mi Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, de fecha veintiséis de octubre de dos mil catorce, documental con la que acredito que dentro de mi

expediente personal que envió el H. Ayuntamiento Municipal de Chalco, Estado de México, no remitió dicho contrato, es decir, no envió de forma completa mi documentación y jamás llene el formato que anexa en mi expediente personal en la foja número 28, y como se aprecia en el mismo el numero de fojas fue alterado e inclusive existe dentro del mismo una hoja de un Curriculum Vitae que no corresponde con el suscrito.

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de mi Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, de fecha veintiséis de octubre de dos mil catorce, con el cual acredito fehacientemente que mi contrato laboral que me unía con el H. Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, concluyó el treinta y uno de enero de dos mil catorce, por lo que una vez que concluyó mi relación con esta Institución, esta opto por comisionarme en diversas aéreas de esta Institución, pero sin la seguridad de la estabilidad en el empleo, esto es, con la incertidumbre de que cada quincena sería la última.

Este hecho no fue enviado, ni mencionado por el H. Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, en sus oficios números DAM/RH/3232/2014 y DAM/3373/2014, por lo que Bajo Protesta de Decir Verdad lo manifiesto, mi Contrato de Trabajo concluyo en el mes de enero del dos mil catorce, y durante estos meses mi estabilidad fue incierto, por lo que yo presente mi renuncia en el quince de noviembre del año en curso. Cabe aclarar que el cargo que tuve no fue de confianza, de Dirección o Mando, mi cargo siempre fue de carácter administrativo, siendo mi actividad principal el de sacar copias, notificar expedientes, en general, auxiliar en lo que se me encomendaba, y como puede apreciar en este empleo jamás ejercí mi profesión, pero mi necesidad del trabajo y mi deseo, como el de la mayoría de los padres de familia, es el de sacar adelante a mis hijos.

Por tanto, este hecho me es un tanto discriminatorio, ¿Por qué?, ya que por el hecho de haber sido trabajador en una Institución, no me hace ser más o menos ciudadano, y sobre todo como un ser humano que tiene necesidad de sobrevivir. Esto también lo menciona la Época: Décima Época, Registro: 159820, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional Tesis: P. VII/2013 (9a.), Página: 136

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que desde una óptica tributaria, el derecho al mínimo vital tiene fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de los gobernados en lo general, independientemente de la manera en la que obtengan sus ingresos o de la prerrogativa establecida en el artículo 123 constitucional para la clase trabajadora, consistente en que se exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo; pero también reconoce que el derecho al mínimo vital trasciende tanto a la materia fiscal como a la laboral, y abarca un conjunto de medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y negativas) que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones prescritas por el artículo 25 constitucional, tomando en cuenta que ese derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución Federal, lo cual en términos

de su artículo 1o., resulta concordante con los instrumentos internacionales que son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema. En ese sentido, si el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital, éste deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país.

Este hecho me hace preguntarme, respecto al alcance del artículo primero Constitucional que me permito transcribir:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011

Artículo 1o. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Que hay con mis derechos humanos, en específico con los siguientes:

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente, los unos con los otros.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 23

1. *Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.*
2. *Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.*
3. *Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.*
4. *Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.*

Y que pasa entonces con el Pro Homine:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Párrafo adicionado DOF 04-12-2006, 10-06-2011

Artículo reformado DOF 14-08-2001

Siendo por tanto la Constitución Política de un País la Norma Suprema, por tanto la Época: Novena Época, Registro: 180240, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 80/2004, Página: 264:

**SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.**

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno.

en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR.

En virtud de que el ejercicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese órgano fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular, debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución. La anterior conclusión se corrobora por lo dispuesto en los diversos preceptos constitucionales que, en términos de lo previsto en el artículo 94 de la propia Constitución General de la República, determinan las bases que rigen la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en los que al precisarse los asuntos de su conocimiento, en ningún momento se delega al legislador ordinario la posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a cargo de aquélla.

Por lo que posiblemente la base tercera fracción III, de la Convocatoria para Vocales Distritales Municipales del Proceso Electoral 2014-2015, puede violar mis Derechos Humanos y no tener armonía con los artículos 1 y 5 Constitucionales..."

Como consecuencia de todo lo anterior, obran en el expediente las siguientes constancias:

A) Oficio número DAM/RH/3232/2014, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, y recibido el veintisiete siguiente en Oficialía de Partes de este Instituto, suscrito por la Lic. Verónica Jannette Yáñez Espinosa, Subdirectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Chalco, México.

B) Oficio número DAM/RH/3373/2014, de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Lic. Verónica Jannette Yáñez Espinosa, Subdirectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Chalco, México.

C) Copia certificada del expediente laboral del C. Héctor Galicia Cadena.

El ciudadano cuya designación se cuestiona aportó como elementos de prueba los siguientes:

- 1.-** Copia simple del Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado del **C. Héctor Galicia Cadena**, con fecha del veintiséis de octubre de dos mil trece.
- 2.-** Copia simple de un escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, signado por el **C. Héctor Galicia Cadena**.
- 3.-** Copia simple del oficio número IEEM/SE/1703/2014, de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto.
- 4.-** Copia simple del escrito de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, signado por el Consejero Presidente de este Consejo General, y el Secretario Ejecutivo de este Instituto, consistente en la designación del **C. Héctor Galicia Cadena**, como Vocal de Capacitación de la Junta Municipal número 26, con sede en Chalco, México.
- 5.-** Copia simple del gafete del **C. Héctor Galicia Cadena**.

Con base en los artículos 435, fracción I, 436 fracción I y 437, párrafos primero y segundo, del Código Electoral del Estado de México, las pruebas marcadas con los incisos A), B) y C), son documentales públicas, por lo que salvo prueba en contrario, tendrán pleno valor probatorio, respecto a su autenticidad y a la veracidad de su contenido.

Así las cosas, el contenido de la probanza correspondiente al inciso A) es el siguiente:

En el oficio número DAM/RH/3232/2014, la Lic. Verónica Jannette Yáñez Espinosa, Subdirectora de Recursos Humanos, señala que:

“...En Atención a su oficio número IEEM/SE/2070/2014 y en alcance al similar No. IEEM/SE/1683/2014, donde solicita la colaboración de este H. Ayuntamiento para que se informe si el C. HECTOR GALICIA CADENA, laboró o actualmente trabaja en esta Administración; al respecto le comunico que el ciudadano antes mencionado trabajó como Administrativo más de 1 año, no omito comentarle que actualmente ya **no se encuentra laborando** en esta Institución...”

Con relación a la prueba identificada con el inciso B), relativa al oficio número DAM/RH/3373/2014, consta lo siguiente:

“La que suscribe Licenciada **VERONICA JANNETTE YAÑEZ ESPINOZA**, subdirectora de recursos humanos del H. Ayuntamiento de Chalco Estado de México.

Por medio del presente curso, derivado de su similar 3471/2014 remitido en fecha 05 de Diciembre del año 2014, mediante la cual se requiere al C. FRANCISCO OSORNO SOBERON, Presidente municipal de Chalco Estado de México, informar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral el periodo de tiempo en el que laboro en este H. Ayuntamiento el C. HECTOR GALICIA CADENA, quien actualmente se encuentra como Vocal de capacitación de la junta municipal nuevo 26, con sede en Chalco Estado de México; derivado de dicha solicitud me permito informar que de acuerdo a la documentación que obra en la subdirección de recursos humanos de este H. Ayuntamiento, el C. HECTOR GALICIA CADENA, con numero de nomina 5698, y fecha de ingreso 16 de enero del 2013, adscrito la Dirección de Administración con la categoría auxiliar "A" quien mantuvo una comisión en la Dirección de Obras Públicas Municipales hasta el día tres (3) de Agosto del año 2013 y posteriormente comisionado a la Dirección de Desarrollo Social y participación Ciudadana; en fecha 15 de Noviembre del año dos mil catorce (2014) ante esta dependencia presento su renuncia de manera voluntaria para terminar la relación laboral que sostenía con este H. Ayuntamiento, hecho que se acredita con copia certificada de dicha renuncia voluntaria que obra en su expediente laboral mismo que se adjunta el presente escrito....."

Por cuanto hace a la prueba marcada con el inciso C), relativa al expediente del ciudadano en cuestión, se advierte lo siguiente:

Se encuentra un escrito de fecha quince de noviembre de dos mil catorce, y recibido por la Subdirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de referencia el mismo día, a las doce horas con cincuenta minutos, suscrito por el ciudadano cuestionado, mediante el cual presenta su renuncia al empleo de auxiliar "A", manifestando que es por motivos personales; copias que acompaña el ciudadano objetado: credencial de elector; reconocimiento al empleado del mes de agosto del año dos mil catorce; oficio número DOPM/1072/2013 de fecha tres de agosto del dos mil trece, mediante el cual se le da de baja; reconocimiento por asistir al curso de Integración y Desarrollo Humano, del mes de junio de dos mil trece; Clave Única del Registro de Población; acta de nacimiento expedida el veintisiete de febrero de dos mil ocho; certificado de no antecedentes penales; carta de recomendación de fecha catorce de enero de dos mil trece; título de Diseñador de los Asentamientos Humanos de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos; cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública; escrito mediante el cual acredita al ciudadano objetado como miembro de la generación 1982-1986 en la Licenciatura de Diseño de los Asentamientos Humanos, de fecha catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete; certificado médico de fecha diecisiete de enero de dos mil trece; copia de la credencial de elector; acta de nacimiento expedida el dos de agosto de dos mil diez; cartilla de servicio militar; dos recibos de teléfonos de México de fecha veinticinco de enero de dos mil trece; curriculum vitae; de [REDACTED] escrito de fecha veinte de febrero de dos mil trece, signado por el Director de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría dirigido a la Contralora Municipal de Chalco, México, a efecto de informarle que el ciudadano objetado si puede ser contratado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio

* Se eliminan 4 palabras por tratarse de información confidencial
IEEM/SE/AE/34/2014 fundamentado en los artículos 2, fracción II y 25, 18
fracción I de la LTAIPEMM.

público; cédula curricular, de fecha uno de abril de mil novecientos cincuenta y tres.

Por cuanto hace a la constancias marcadas con los numerales del 1 al 5, únicamente tendrá valor indiciario, en términos del artículo 438 del código comicial, al haberse exhibido en copia fotostática simple. Ello es así, porque si bien es cierto que las copias fotostáticas son representaciones fotográficas de otros documentos, también lo es que las mismas se obtienen mediante procedimientos técnicos y científicos que permiten lograr, no sólo la copia, sino la composición, arreglo o alteración de los originales reproducidos, por lo que, por sí mismas, no pueden generar certeza sobre su autenticidad, al ser posible que no correspondan al contenido fiel del documento o documentos de los que se toman.

Por cuanto hace al requerimiento que solicitó el ciudadano objetado en su escrito de desahogo de garantía de audiencia en relación a la copia certificada del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, cabe decir que, no resulta procedente realizar dicho requerimiento, en atención al numeral 419 del Código Electoral Local, el cual señala que:

Artículo 419. Los medios de impugnación deberán presentarse ante la autoridad u órgano electoral competente, mediante escrito que deberá cumplir con los requisitos siguientes:

...
VI. Ofrecer y aportar las pruebas, salvo cuando verse sobre controversias de derecho, dentro de los plazos para la interposición de los medios de impugnación previstos en este Código; mencionar, en su caso, las probanzas que habrán de aportarse dentro de dichos plazos y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieran sido entregadas.

Lo anterior, toda vez que del material probatorio no se advierte que el ciudadano en cuestión, haya solicitado por escrito, a la instancia correspondiente la prueba mencionada, y menos aún que le haya sido negada.

En esta virtud, de la adminiculación de las probanzas antes descritas, se advierte que en fecha dieciséis de enero de dos mil trece, el **C. Héctor Galicia Cadena**, ingresó a trabajar en el Ayuntamiento de Chalco, México; que el cargo que desempeñó en dicha administración fue el de auxiliar "A", en la Dirección de Obras Públicas Municipales hasta el día tres de agosto del año dos mil trece, y posteriormente fue comisionado a la Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana; que el día quince de noviembre del año dos mil catorce, presentó su renuncia a ese cargo.

Por tanto, es dable concluir que:

1.- El **C. Héctor Galicia Cadena**, incumple con la Base Primera de la multicitada convocatoria, toda vez que, renunció el quince de noviembre del año dos mil catorce, al Ayuntamiento de referencia, es decir, continuo laborando ocho días después de su designación.

2.- Así mismo incumple con la fracción XIII de la Base Tercera de la convocatoria citada, en virtud de que, su relación laboral, concluyó con posterioridad a la publicación de la convocatoria, la cual se efectuó el once de agosto de dos mil catorce, es decir, noventa y seis días después.

Sin embargo, con independencia del incumplimiento de los requisitos mencionados, este Consejo General considera que analizados los precedentes y criterios orientadores reiterados por el órgano jurisdiccional local, es pertinente arribar a una nueva reflexión y dejar subsistente el nombramiento del **C. Héctor Galicia Cadena**, Vocal de Capacitación de la Junta Municipal número 26, con sede en Chalco, México, toda vez que esta autoridad considera que el ciudadano objetado al renunciar el día quince de noviembre del dos mil catorce, (antes del inicio de sus labores como Vocal), no desempeñó dos empleos remunerados de manera simultánea y por ende se encuadra en el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Estado de México, al resolver el JDCL/43/2014.

Aunado a que adecuarse a dichos criterios garantiza el derecho político electoral de del ciudadano objetado de integrar autoridades electorales correlacionado con el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a todos los ciudadanos mexicanos el derecho de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, máxime que el ciudadano designado ha demostrado reunir las cualidades que establece la ley.

Visto lo anterior y atento a las constancias respectivas con fundamento en los artículos 174 fracción I, 175 y 185 fracción VI del Código Electoral del Estado de México; en el apartado "5. Lineamientos para la designación de vocales" del Programa General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2014-2015; en la Bases Séptima párrafo segundo y Décima primera párrafo tercero de la Convocatoria respectiva; y en el punto TERCERO del acuerdo número **IEEM/CG/68/2014**, este órgano superior de dirección.

RESUELVE

PRIMERO. No se acredita el incumplimiento a lo establecido en las Bases Primera y Tercera fracción XIII, de la Convocatoria para Vocales Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, en términos de lo razonado en el considerando **SEGUNDO** de esta resolución.

SEGUNDO. No ha lugar a acordar la sustitución del **C. Héctor Galicia Cadena**, Vocal de Capacitación de la Junta Municipal número 26, con sede en Chalco, México, en atención a las consideraciones expresadas en el considerando **SEGUNDO** de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE personalmente al **C. Héctor Galicia Cadena** y por estrados la presente resolución, lo anterior por conducto de la Secretaría Ejecutiva.

ARCHÍVESE en su oportunidad como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los CC. Consejeros Integrantes presentes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria de fecha once de febrero del año dos mil quince.

"TU HACES LA MEJOR ELECCIÓN"

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ**

**EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL**

VMCT/Aavm/ahh